



LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 28, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; Y CON BASE EN LO SIGUIENTE:

ANTECEDENTES

I.- Mediante escrito sin número, recibido el 28 de agosto de 2017, los C.C. Faustino Vázquez Hernández y otros, integrantes del Comité de Trabajadores Cesados de Tabasco, presentaron ante el Congreso del Estado, denuncia de Juicio Político en contra del Lic. José Irvin Madrigal Mandujano, en su calidad de Magistrado Presidente, el Lic. Andrés Pérez Morales, en su calidad de Magistrado representante de los Trabajadores y la Lic. Gabriela Jiménez de la Cruz, en su calidad de Magistrada representante de las Entidades Públicas, integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por incurrir en faltas graves a la Constitución Local y las leyes que de ella emanan por actos de acción u omisión en el desempeño de sus respectivos cargos públicos, toda vez que, sus denuncias laborales no han sido tramitadas en los plazos que marca la ley.

Señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones, el ubicado en Av. Paseo de la Sierra número 104, interior 16, Colonia Reforma, Villahermosa, Tabasco; y autorizando para dichos efectos al M.D. Armando Jiménez Olmos y al Lic. Héctor Gómez Colorado.

II.- El día 31 de agosto de 2017, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, mediante Oficio No. HCE/DASP/CRSP/656/2017, se remitió el escrito mencionado en el antecedente anterior, al M. D. Joel Alberto García González, Director de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a la Información Pública, para proceder en los términos dispuestos por el Artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

III.- El día 20 de septiembre de 2017, mediante Oficio No. HCE/DAJTAIP/0652/2017, el M. D. Joel Alberto García González, Director de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Congreso, remitió al Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, Secretario General del Congreso, las constancias originales que integran el expediente de Juicio Político HCE/DAJTAIP/JP/029/2017, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por los C.C. Faustino Vázquez Hernández y otros, integrantes del Comité de Trabajadores Cesados de Tabasco, en contra de los licenciados José Irvin Madrigal Mandujano, Andrés Pérez Morales y Gabriela Jiménez de la Cruz, en su calidad de Magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.



IV.- El día 21 de septiembre de 2017, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, mediante Oficios No. HCE/DASP/CRSP/715/2017 y HCE/DASP/CRSP/716/2017, se turnó respectivamente, a las Comisiones Ordinarias de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Gran Jurado respectivamente, copia del escrito referido en el antecedente anterior, por medio del cual se remite el expediente de Juicio Político HCE/DAJTAIP/JP/029/2017, formado con motivo de la denuncia presentada por los C.C. Faustino Vázquez Hernández y otros, integrantes del Comité de Trabajadores Cesados de Tabasco, en contra de los licenciados José Irvin Madrigal Mandujano, Andrés Pérez Morales y Gabriela Jiménez de la Cruz, en su calidad de Magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

V.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 63, 65, 69, 75 fracciones XIII y XX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 57, 58 fracciones XIII, y XX, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, los Diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Gran Jurado, se reunieron el día 28 de febrero de 2018, a efecto de analizar y dictaminar el Juicio Político referido.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en las Comisiones Ordinarias de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Gran Jurado, se encuentra en trámite el juicio político promovido mediante escrito sin número, por los C.C. Faustino Vázquez Hernández y otros, integrantes del Comité de Trabajadores Cesados de Tabasco, en contra de los licenciados José Irvin Madrigal Mandujano, Andrés Pérez Morales y Gabriela Jiménez de la Cruz, en su calidad de Magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

SEGUNDO.- El objeto del presente Acuerdo es dilucidar si se colman los supuestos para la procedencia del Juicio Político; atento a ello, es menester señalar el acto denunciado:

ACTO DENUNCIADO

“...Que por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º, 17, 123 apartado b, fracción X, 124, 128, 109, 110, 114, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67, 68 y 72, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, ocurrimos en ejercicio de nuestros derechos a interponer formal **demanda de Juicio Político en contra del Lic. José Irvin Madrigal Mandujano en su calidad de Magistrado Presidente, Lic. Andrés Pérez Morales en su calidad de Magistrado representante de los Trabajadores y Lic. Gabriela Jiménez de la Cruz en su calidad de Magistrada representante de las Entidades Públicas**, quienes forman el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, **por incurrir en faltas graves a la Constitución Local y las leyes quede ella emanen por actos u omisión en el desempeño de sus respectivos cargos públicos...**”



Toda vez que, según señalan los quejosos en los hechos narrados en su denuncia, son ciudadanos cesados por distintas dependencias que forman parte del Poder Ejecutivo del estado, motivo por el cual acudieron al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de nuestra entidad, para interponer demanda por despido injustificado; mismas que consideran, han sido tramitadas fuera de los plazos que establece la ley, ocasionando una dilatación en el procedimiento de sus juicios laborales.

TERCERO.- Ahora bien, de conformidad con el artículo 67, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se impondrán, mediante Juicio Político, las sanciones indicadas en esa Constitución a los Servidores Públicos en ella señalados, cuando en el ejercicio de sus funciones incurren en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Señalando así mismo que no procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas.

Por su parte, el artículo 68 del mismo ordenamiento jurídico, establece los lineamientos generales del Juicio Político en los siguientes términos: *“Podrán ser sujetos de Juicio Político el Gobernador del Estado, los Diputados a la Legislatura Local, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los integrantes del Consejo de la Judicatura, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Titular del Órgano Superior de Fiscalización, el Consejero Presidente, los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, los integrantes de los demás órganos constitucionales autónomos, los titulares de las Dependencias, los directores de la Administración Pública Estatal, el Fiscal General del Estado y los servidores públicos de mando superior de la Fiscalía hasta el nivel de director, los agentes del Ministerio Público, los presidentes municipales, los concejales, los síndicos de Hacienda, los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.*

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público, en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. En el caso de los consejeros Presidente y Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, su remoción será tramitada por el Consejo General del instituto Nacional Electoral, cuando incurran en alguna de las causas graves que establece la Ley General aplicable.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante el Tribunal Superior de Justicia, previa la declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.



Conociendo de la acusación, el Tribunal Superior de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, aplicará la sanción correspondiente, mediante resolución (sic) de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión una vez practicadas las diligencias correspondientes y con Audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y del Tribunal Superior de Justicia son inatacables.”

Por su parte, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 68 y 69, del Título VII de la Constitución Política del Estado de Tabasco, establece:

“Artículo 6.- Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Artículo 7.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de su buen despacho:

I. El ataque a las instituciones democráticas;

II. El ataque a la forma de Gobierno Republicano, representativo, Federal;

III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

IV. El ataque a la libertad de sufragio; V. La usurpación de atribuciones;

V. Cualquier Infracción a la Constitución o a las Leyes que de ella emanen, cuando causa perjuicios graves al Estado o a uno o varios de sus municipios o a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones públicas.

VII. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior; y,

VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública del Estado de los Municipios de los organismos paraestatales y las normas que determinan el manejo de los recursos económicos de esas entidades públicas.

No procede el juicio por la mera expresión de ideas. El Congreso del Estado valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquello tenga carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente Ley y se estará a lo dispuesto por la Legislación Penal.”

Por lo que procede establecer si el acto denunciado encuadra con alguna causal de procedencia del Juicio Político; es decir, si la demora en el procedimiento de los juicios laborales, denunciada como conducta infractora, se equipara a una violación de un interés público fundamental.



Doctrinalmente, por intereses públicos fundamentales podemos entender, la actuación que despliega el estado en defensa de los fundamentos que le dan vida, en aras del beneficio colectivo; es decir, a contrario sensu no se abarcan los intereses de los particulares.

Lo anterior permite concluir que el juicio político tutela el interés público y no intereses particulares, en tanto que su único objetivo es garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la función pública.

Entonces, la ley de la materia establece como requisito para la procedencia del Juicio Político que se presenten elementos de prueba bastantes y suficientes a fin de acreditar que la conducta atribuida al funcionario público denunciado es de las señaladas como violatorias a los intereses públicos fundamentales.

Del análisis de las constancias que obran como prueba en la presente denuncia, se concluye que no son suficientes para acreditar que se actualiza la violación a un interés público fundamental. Pues de la lectura al artículo 7, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en ninguna de sus ocho fracciones se establece como causal de procedencia para el juicio político la demora por parte de servidores públicos de los diversos tribunales de la entidad o la omisión de emitir las sentencias o laudos respectivos, en los procedimientos de los juicios laborales de los que tengan conocimiento.

En efecto, si el acto denunciado consiste en que los Magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado han sido omisos o se han demorado en emitir las sentencias o laudos en los tiempo que marca la ley de la materia en los diversos juicios laborales referidos en el escrito inicial de denuncia de juicio político, es inconcuso que no se está violentando el desarrollo normal de las instituciones del estado; ya que, de los hechos narrados, no se contempla que en la procedencia de éste, se vulneren los derechos de los ciudadanos que interpusieron juicios de carácter laboral ante el tribunal correspondiente; toda vez que, si aquellos ven violentados sus derechos de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos cuentan con recursos o juicios que pueden entablar en cualquier momento a efecto de que dichos tribunales se apeguen a los principios de una justicia pronta y expedita, tal es el caso del juicio de amparo indirecto; por tanto, si los actores, no ven que sus respectivas demandas se apeguen al procedimiento señalado por la ley a pesar de haber ejercido sus derechos y cumplido con las cargas procesales en tiempo y forma, están en la posibilidad jurídica de recurrir, se reitera, a otras instancias legalmente establecidas a fin de subsanar las omisiones por parte de los magistrados referidos.

Por lo tanto, es de mencionarse que el juicio político seleccionado por los ciudadanos como vía para sancionar tales actitudes de omisión y tardanza por parte de dichos funcionarios públicos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en el desahogo de los procedimientos jurídicos puestos a su conocimiento, no es la idónea para poder exigirle que subsanen dichas actitudes.



En ese sentido, no se omite manifestar que en el marco jurídico del Estado existen otras vías a las que pueden recurrir a fin de establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, las que pueden ser de carácter civil, penal o administrativo, toda vez que la de carácter político no se establece en el presente caso.

De lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados se encuentran facultados para expedir en el ámbito de su competencia, leyes relativas a las responsabilidades de los servidores públicos, las que por su naturaleza pueden clasificarse en políticas, penales y administrativas. Así, los procedimientos para hacer exigibles ese tipo de responsabilidades guardan diferencias substanciales entre sí, de acuerdo con las causas que las originan y las autoridades encargadas de conocer de esos asuntos, habida cuenta que por disposición expresa del citado precepto constitucional deben desarrollarse de forma autónoma, y no pueden imponerse dos sanciones de la misma naturaleza por una sola conducta. Por lo que es de concluirse, que el ciudadano puede concurrir a otras instancias que estén facultadas por ley en el ámbito de sus competencias, a efecto de resolver la cuestión planteada en el caso concreto.

CUARTO.- Del análisis de la denuncia planteada y de todas las constancias que obran en el expediente, se concluye que no se satisfacen los requisitos para incoar el procedimiento de Juicio Político en contra del Lic. José Irvin Madrigal Mandujano en su calidad de Magistrado Presidente, el Lic. Andrés Pérez Morales en su calidad de Magistrado representante de los Trabajadores y la Lic. Gabriela Jiménez de la Cruz en su calidad de Magistrada representante de las Entidades Públicas, integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Toda vez que, los hechos que motivaron la denuncia correspondiente, no encuadran en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En consecuencia, se declara improcedente instaurar el juicio político promovido por los C.C. Faustino Vázquez Hernández y otros, integrantes del Comité de Trabajadores Cesados de Tabasco, en contra del Lic. José Irvin Madrigal Mandujano, en su calidad de Magistrado Presidente, el Lic. Andrés Pérez Morales, en su calidad de Magistrado representante de los Trabajadores y la Lic. Gabriela Jiménez de la Cruz, en su calidad de Magistrada representante de las Entidades Públicas, integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por incurrir en faltas graves a la Constitución Local y las leyes que de ella emanan por actos de acción u omisión en el desempeño de sus respectivos cargos públicos; toda vez que, sus denuncias laborales no han sido tramitadas en los plazos que marca la ley.

QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con el artículo 6, 7, 8, 9 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 68 y 69, del Título VII de la Constitución Política Del Estado De Tabasco; **ha tenido a bien emitir el siguiente:**



ACUERDO 131

ARTÍCULO ÚNICO.- Por las causas expuestas en el Considerando Cuarto, se declara que al no estar satisfechos los requisitos del artículo 67, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 68 y 69, del Título VII de la Constitución Política del Estado de Tabasco, no es procedente instaurar el juicio político, promovido por los C.C. Faustino Vázquez Hernández y otros, integrantes del Comité de Trabajadores Cesados de Tabasco, en contra del Lic. José Irvin Madrigal Mandujano, en su calidad de Magistrado Presidente, el Lic. Andrés Pérez Morales, en su calidad de Magistrado representante de los Trabajadores y la Lic. Gabriela Jiménez de la Cruz, en su calidad de Magistrada representante de las Entidades Públicas, integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Notifíquese a los denunciados o a los autorizados en el antecedente I, la presente resolución para su conocimiento y efectos.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

**DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES
PRESIDENTE**

**DIP. SOLANGE MARÍA SOLER LANZ
SEGUNDA SECRETARIA**